

Entre una educación liberadora y una psicología comprometida con la emancipación de los pueblos

Andrea Marcela Hoyos¹
y Angie Karina Bocanegra Marín²

“Sería sin embargo estéril y desgraciado que los estudiantes colombianos que han sido la chispa de la revolución permanecieran al margen de ésta por cualquier causa; por falta de información, por superficialidad, por irresponsabilidad o por miedo. Esperamos que los estudiantes respondan a la llamada que les hace su Patria en este momento trascendental de su historia y que para eso dispongan su ánimo para oírla y seguirla con una generosidad sin límites”.

(Camilo Torres Restrepo, 1965).

Introducción

Empezaremos este artículo mostrando una contextualización de la crisis de la educación en Colombia, que ha pasado de estar bajo un modelo económico proteccionista a un modelo neoliberal desde un poco antes de la década de los 90, y que en la actualidad responde a una economía extractiva, es decir, a intereses de empresas transnacionales y de la clase dominante del país. Entramos en una fase de reprimarización de la economía a través de la implementación de las “locomotoras del

1 Estudiante de Psicología Universidad Nacional de Colombia. E-mail: anmhoyosma@unal.edu.co

2 Estudiante de Psicología Universidad Nacional de Colombia. E-mail: akbocanegram@unal.edu.co

crecimiento”, que es el modelo de desarrollo que propone el actual gobierno. Este modelo económico no responde a las necesidades del pueblo colombiano, pues todos los derechos fundamentales, entre ellos la educación, han pasado a ser instrumentos de un sistema hegemónico tanto cultural, como económico, y político, y como tal, están permeados por prácticas de dominación y control que limitan la sublevación del pueblo ante la desigualdad social y la explotación excesiva de la tierra. Nos proponemos mostrar la relación que tiene lo anterior con una guerra psicológica, que impide la construcción de subjetividades políticas de oposición.

En un segundo apartado abordaremos la respuesta que ha dado el movimiento estudiantil, y el movimiento social y popular a la crisis generalizada del país. Justamente en un momento de movilización y unidad popular, frente a un contexto de opresión histórica, en donde la educación, pese a ser un derecho constitucional, en la práctica es un servicio, en el cual el conocimiento se convierte en un objeto de intercambio mercantil. En este contexto la educación, así como las disciplinas tienden a responder a ésta tendencia, creando no sólo conocimiento a favor de la privatización de los derechos, la profundización de la explotación del territorio, y la pérdida de la soberanía; sino además, negando el carácter político de su accionar, o encubriendo el silencio cómplice academicista, y la acumulación de teoría que no aporta de manera comprometida a la superación de los problemas sociales.

Como estudiantes de psicología tenemos un doble reto en relación a la construcción de alternativas de liberación frente al contexto enunciado. Por un lado como estudiantes universitarias, hacemos parte de un proceso de unidad estudiantil para la transformación del actual sistema educativo colombiano: la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) que surge en el año 2011 como respuesta y propuesta de la organización estudiantil, frente a la crisis de la educación que se profundizaba con el proyecto del gobierno actual de reformar la ley 30, ley que regula la educación superior en Colombia. Frente a este panorama el accionar de la organización estudiantil llevó a que el gobierno retirara

dicho proyecto del Congreso y construyera una propuesta alternativa de educación para el país.

En el último apartado de este artículo, brindaremos algunas alternativas frente al tema, desde la perspectiva de la organización estudiantil, entendiendo la responsabilidad y necesidad de cuestionar y proponer una transformación tanto de las prácticas pedagógicas, como de las bases epistemológicas en la enseñanza de la psicología. Esta visión crítica del accionar y complicidad del/la profesional psicólogo(a), para responder de manera eficaz a las necesidades del pueblo, es necesaria hoy para hacer frente a las problemáticas del país.

Así, el compromiso en la defensa de la educación pública, desde el papel como estudiantes, implica también el replanteamiento de nuestro quehacer profesional, de cara a la proyección no sólo de nuestro futuro laboral, sino principalmente de poner la educación al servicio del pueblo, y hacer frente al actual estado de las cosas, que coloca a la educación y a la práctica de la psicología al servicio del mercado.

Contexto nacional y educación superior

Las problemáticas sociales que enfrenta el pueblo colombiano hoy, están insertas dentro del panorama económico mundial de libre mercado, en donde el Estado se desliga cada vez más de su responsabilidad como garante de los derechos sociales, cediendo paso a las políticas del sector privado. Atrás han ido quedando los ideales del modelo proteccionista que buscaba garantizar el estado de bienestar con los derechos mínimos para la población. Mientras el neoliberalismo se erige a través de una hegemonía cultural, que permea las relaciones sociales y políticas. Una de las expresiones de este proceso de globalización, ha sido la profundización del conflicto armado-político en el país, lo que ha generado una crisis estructural: económica, política y social, afectando directamente los derechos de los ciudadanos.

El gobierno de Álvaro Uribe agudizó la falta de soberanía en el país con la aprobación de las bases militares de Estados Unidos en el territorio colombiano, y una política de “seguridad democrática” que buscaba legitimar el terrorismo de Estado a través de la militarización de las instituciones sociales y la vida cotidiana de los y las colombianas. Ante este panorama, el imaginario social sobre la violencia se ha transformado, pues en el marco de esta cultura política, en el país se ha producido una especie de “naturalización del conflicto” y se ha fortalecido la vía contrainsurgente como la única solución. Con la Seguridad Democrática se normaliza en el imaginario social, la idea de que el conflicto armado se contrarresta con la eliminación inhumana de un “enemigo interno”, como lo plantea Herrera: “todavía hoy se sabe de narrativas que justifican la muerte no sólo como medio para la eliminación del opositor político, sino también como instrumento ideal para instaurar el terror que pretende deslegitimar la acción política de la oposición; al parecer el discurso hegemónico del enemigo interno se sigue usando para ‘convencer’ a la sociedad del carácter de lo no-humano, de no-persona del opositor político” (Herrera, 2008: 6).

Esto se ha manifestado en una imagen colectiva de la violencia de Estado como legítima, normal y necesaria; mientras se deslegitima el derecho de los pueblos a rebelarse, a oponerse y pensar diferente. Una imagen que se crea y se fortalece a través de los medios de información, por medio de la estigmatización de toda posición política que sea contradictoria a la política del gobierno, señalando como “terroristas” a movimientos sociales, sindicatos, defensores de derechos humanos, periodistas alternativos y estudiantes.

Esta situación de señalamiento y deslegitimación de la protesta social da cuenta de una guerra psicológica “que actúa directamente sobre los procesos de construcción de sentido y significado de las personas” (Barrero, 2006: 72), sobre su subjetividad, su cotidianidad, y sus emociones, una guerra que manipula los imaginarios sociales por medio de mecanismos de control estatal, como son los medios de comunicación, y a través de las instituciones, los discursos, la militarización de la vida, la

naturalización de la guerra y la deshumanización del conflicto, en donde los actos crueles, los asesinatos y las amenazas se convierten en algo cotidiano que inmoviliza a las personas, el miedo se generaliza y se frustra la esperanza de transformar o incluso cuestionar ese estado de cosas.

La guerra psicológica como lo plantea Edgar Barrero (2006) retomando a Martín Baró, busca generar un sentimiento de inseguridad, mediante la ejecución de actos crueles que desencadenan un miedo masivo. El mismo autor ha mostrado como se ha legitimado en el imaginario Colombiano una estética particular, un gusto por los actos crueles y por la eliminación del otro, de lo diferente, por causar daño colectivo y por la prolongación del sufrimiento, esto es, cómo se ha materializado la atrocidad en la sociedad colombiana (Barrero, 2011), en el marco justamente de esa guerra psicológica.

Ahondando este hecho común en la historia de Colombia, el gobierno actual de Juan Manuel Santos, ha continuado la política de “Seguridad Democrática”, en tanto dispone de los mismos elementos de estigmatización y señalamiento de la protesta social, para darle desarrollo al Plan de Gobierno “Prosperidad para todos”. El Modelo de Desarrollo propuesto por el actual Presidente consta de cinco “locomotoras para el desarrollo” (que comprometen: la vivienda, infraestructura, desarrollo agrícola, la minería y el petróleo, y los avances en innovación) y continúan con la profundización del conflicto armado, fundamentado en la “importancia” del modelo económico extractivista y de inversión extranjera que conlleva al despojo ilegal de tierras, la reprimarización de la economía, la extracción e intercambio indiscriminado de los recursos naturales y la crisis de soberanía sobre el territorio colombiano.

El resultado de esas políticas de gobierno, que terminan acumulándose en políticas de Estado, ha sido la vulneración de los derechos de la ciudadanía con la pérdida paulatina del patrimonio natural, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la privatización de los servicios públicos, altos índices de pobreza extrema en el país, y con ello, la imposibilidad de eliminar las desigualdades sociales, la falta de

acceso y calidad frente a derechos constitucionales como lo son la salud y la educación.

Sumado a lo anterior, Colombia atraviesa una vez más por un proceso de diálogos de paz que se aterriza en un escenario de negociación entre el gobierno actual y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que se adelanta con representantes de cada posición en una mesa de diálogo que inició formalmente en Oslo-Noruega, de espaldas a los sectores sociales y populares y en donde el gobierno ha dejado claro que no se trata de una transformación estructural de la sociedad colombiana, sino de una negociación casi personalizada con cada uno de los integrantes del grupo guerrillero. Esto ha llevado a cuestionar por parte de los movimientos sociales los mecanismos para la participación de la ciudadanía en la construcción paz y el horizonte que la misma debe tener de cara a las necesidades del país. Entre otras cosas, lo paradójico que resulta hablar de paz cuando no hay un cese de hostilidades, ni una intención por parte del gobierno de discutir con el pueblo una transformación radical de las condiciones sociales actuales ya mencionadas. Mientras que, temas como la educación terminan teniendo un papel secundario con respecto a la inversión en seguridad y defensa. Situación que coloca la discusión sobre el imaginario social de la sociedad colombiana, acerca de lo legítimo, la vía de aplastar al otro, para imponer la mirada hegemónica, pues pese a que se adelanta una mesa de diálogo, el cese de hostilidades por parte del Estado tampoco es un punto de discusión en la mesa.

Este panorama ha representado para la educación en Colombia una reducción en la inversión que el Estado hace desde el presupuesto nacional en este sector, frente a una exigencia cada vez mayor de cobertura, escenario que se muestra con clara evidencia en las cifras ofrecidas por el Ministerio de Educación, que habla de un incremento de cobertura del 37,1% en 2010 a 42,4% en 2012. Sin embargo, dicho incremento ha ido en detrimento de la calidad académica, que pocas veces ha sido un factor central en la inversión, a su vez se ha mostrado una cobertura del 100% de la población en lo referente a educación superior, pero

en esta cifra se incluyen programas técnicos y tecnológicos del SENA que se cataloga como una institución de educación para el trabajo. Es importante destacar tal y como lo muestran los informes oficiales que, cerca del 45,3% de población de jóvenes estudiantes que desertan son universitarios, 52,3% estudian tecnologías, y 63,2% técnica profesional (MEN, 2013). Este panorama nos muestra por un lado la imposibilidad económica de los estudiantes para costearse los estudios, y por el otro, la insuficiencia de en la política de bienestar universitario que les permitiría mantenerse dentro de la academia, asegurando necesidades básicas como lo son la alimentación, subsidios de transportes y fotocopias.

El presupuesto nacional es desproporcionado frente a la necesidad de aumento de recursos, lo que ha generado una dinámica de autofinanciación por parte de las universidades públicas y con ello la intervención de intereses particulares que no están enfocados en la excelencia académica, sino en el incremento de beneficios económicos del sector privado. Esta dinámica vulnera la autonomía universitaria y su capacidad de gobernar desde sus diferentes estamentos (estudiantes, docentes, trabajadores), a esto se suma la estructura organizativa interna del gobierno universitario que centraliza las decisiones en el Consejo Superior Universitario, donde la participación de la comunidad es nula. Además el fin misional de la universidad como constructora de nación, para el caso de la Universidad Nacional de Colombia, se pierde en los intereses del gobierno y el sector privado, dejando de lado la responsabilidad histórica que debe tener ante la sociedad.

Todo lo anterior es evidencia de una crisis general de la educación en el país, que responde entre lo ya mencionado a la falta de una política pública que solucione las problemáticas estructurales de la educación, que van desde la etapa preescolar hasta los programas de posgrado. Como lo ha mencionado Boaventura de Sousa Santos (2007) con respecto a la crisis de las universidades en el siglo XXI, la prioridad de la educación en las políticas públicas se ha perdido junto con la prioridad en políticas sociales como salud y seguridad social, fruto del modelo

de desarrollo económico neoliberal que se ha impuesto a partir de la década de los 80.

La respuesta del Estado a la crisis ha sido por una lado, la militarización de las universidades públicas y la estigmatización de los estudiantes a través del rótulo de “terroristas”, y con ello, las consecuencias de una guerra psicológica que como hemos mencionado conlleva a la naturalización del conflicto y el miedo generalizado, y por otro lado, la sin salida del sector educativo con proyecto de reforma a la ley 30 mal planteada y denegada por el congreso.

La ley 30 de 1992 es la encargada de regular el “servicio” de la educación superior en Colombia, es una ley estructurada en el marco de la implementación de políticas neoliberales que se han desplegado en el país de manera directa, desde hace un poco más de dos décadas, y representa para la educación la mercantilización del conocimiento y con ello la privatización de las universidades públicas y el surgimiento desmedido de institutos de educación superior, que ponen la calidad y dignidad académica en cuestión. El proyecto de reforma al contrario de ser una solución, agudiza las problemáticas mencionadas y limita el ejercicio de las libertades democráticas, el derecho a la protesta y a la participación política del estudiantado, siendo funcional al modelo de desarrollo que se implementa hoy por hoy, y por supuesto responde al libre mercado, a la privatización de la educación y a los derechos fundamentales.

Por tanto la privatización de la educación y la mercantilización del conocimiento también se dan por vía de una guerra psicológica que silencia e inmoviliza al libre mercado, como modelo económico actual. Influyendo entonces de manera directa no sólo sobre las dinámicas educativas a nivel institucional, sino sobre el imaginario social que busca legitimar su accionar violento privatizador, sobre los intereses de los sectores marginados. Sin embargo, frente a un panorama de guerra desigual, las alternativas fluyen en momentos de unidad y esperanza, como valores fundamentales para destruir el miedo, el silencio y la violencia

del modelo económico y crear fortaleza colectiva, cohesión y posibilidades de humanizar el conflicto para transformar la sociedad.

Proceso organizativo: MANE, y movimiento social y popular

La acción de los movimientos sociales en la historia, ha sido clave para las transformaciones políticas y culturales del contexto colombiano, de allí la importancia que ha tenido el proceso organizativo estudiantil en los últimos años, ya que se han articulado las diferentes tendencias políticas estudiantiles en un proceso de unidad establecido en pro de la defensa del derecho a la Educación. La MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), como ha sido denominado este proceso de articulación, dado su carácter de espacio amplio y plural, permite la acogida de diversos puntos de vista y propuestas políticas de estudiantes de diferentes instituciones públicas, privadas, e institutos técnicos y tecnológicos del país. La importancia que ha tenido la MANE es que la unidad de tan diversos sectores estudiantiles permitió el retiro del proyecto de reforma por parte del gobierno nacional, labor que no se habría cumplido sin la movilización y organización del estudiantado, la articulación en un referente político como es el Programa Mínimo de los estudiantes, y la caracterización de la MANE como el espacio amplio de confluencia para la construcción de un nuevo modelo de educación.

Desde el año 1971 no se daba un escenario de confluencia de tales características, en donde varias universidades y organizaciones se reunieron para construir alternativas a los problemas locales sobre aspectos académicos y financieros, y sobre los intereses que fueron comunes en las diferentes regiones del país, como la expulsión de los representantes de la iglesia de los Consejos Directivos de las universidades y la necesidad de frenar la intervención estadounidense en las políticas educativas. Un hito fundamental que marca la importancia de este periodo es la construcción del Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, que representó una propuesta y proyección del accionar político de los estudiantes y no se quedó en el inconformismo y el activismo. Este Programa fue producto de los II y III Encuentro Nacional Univer-

sitario que se realizaron el mismo año como “síntesis de las aspiraciones políticas y educativas de los estudiantes” (Pardo y Urrego, 2003: 3).

Justamente la propuesta de educación que hoy toma forma en el movimiento estudiantil no es ajena al devenir histórico que ha tenido el mismo, pues está enmarcada en el actual Programa Mínimo de los y las Estudiantes, que igual que el anterior es resultado de diferentes encuentros nacionales estudiantiles. La existencia de similitudes con este programa y el de 1971, demuestra la falta de una solución eficaz a todas las problemáticas que se reproducen en las universidades a lo largo de la historia. El Programa Mínimo actual de los Estudiantes está constituido por la reflexión alrededor de seis puntos centrales, pero abiertos a los diferentes aportes que puedan surgir en las discusiones: Autonomía y democracia universitaria, libertades democráticas, excelencia-dignidad académica, financiación-acceso y cobertura, y relación universidad- sociedad.

Desde el 2011, el trabajo sobre la propuesta de una ley educativa alternativa, ha tenido lugar en diferentes escenarios de construcción como el “Encuentro Social y Popular por una nueva educación con Soberanía, Democracia y Paz”, con el fin de avanzar en la exposición de motivos y el articulado de la propuesta de ley. En estos espacios confluyeron no sólo estudiantes, sino diferentes sectores sociales como docentes y trabajadores para discutir elementos de diagnóstico y el horizonte político de nuestra propuesta, dando un ejemplo al país en materia de democracia:

El Primer Encuentro Social y Popular ha adoptado la noción que entiende a la Educación como Bien común de la nación colombiana y Derecho fundamental de todos los ciudadanos, garantizado plenamente por el Estado, construido, definido y defendido por las Comunidades Educativas y la sociedad colombiana en su conjunto. Considera además que la Educación Superior deberá ser Científica, Popular, Democrática, Crítica, Intercultural, Pluriétnica, Antipatriarcal y debe oponerse a cualquier forma de opresión económica, política, étnica, religiosa o de género (MANE, 2012).

El reto como estudiantes universitarios parte de un proceso vigente que se proyecta en un trabajo constante y en diálogo entre el sector estudiantil y la sociedad en general. Como MANE, lo que buscamos es justamente responder a las necesidades del pueblo colombiano, y en este sentido, el contexto actual de diálogos de paz en el país nos exige un debate responsable de nuestro papel como estudiantes y actores políticos en la construcción de la paz, entendiendo que el compromiso desde la MANE se ha plasmado en su consigna: “Por una nueva Educación, por un país con soberanía, democracia y paz”. Es necesario por tanto que desde el sector estudiantil, como desde diferentes sectores de la sociedad se inicie un ejercicio de reflexión y participación consciente sobre lo que se ha llamado un proceso de paz, teniendo en cuenta que la paz, como lo han manifestado diferentes sectores sociales, no se reduce a un diálogo bilateral entre el gobierno y un sector de la guerrilla, sino que implica una transformación estructural como camino hacia la justicia social y la vida digna.

Entender que la paz se construye sólo si existen condiciones de justicia social, y en este sentido con la participación democrática de la población, el objetivo es vincularnos como responsables directos de esa construcción, como estudiantes, ciudadanos, profesionales, etc., lo cual significa empezar a legislar desde los sectores populares. Una apuesta que ha surgido en éste sentido, es la plataforma de organización social: Congreso de los Pueblos³, en donde se proyectan mandatos populares

3 El Congreso de los Pueblos como actor político busca constituirse como protagonista dentro de las luchas populares, políticas y sociales que avanzan en nuestro país. Para esto es clave el fortalecimiento del proceso desde lo local hacia lo nacional; es preciso llevar a cabo procesos de memoria, reflexión y retrospectiva que den cuenta que este proceso construye poder popular desde la legislación popular, en tanto es una posibilidad de empoderamiento de las comunidades, y de los distintos sujetos que hacen parte de la historia de resistencia en Colombia. El Congreso trabaja en 7 ejes que son las directrices de la legislación, es decir los mandatos que vamos realizando deben abarcar estos componentes en tanto nuestra propuesta de país es integral, pues recoge las principales problemáticas a las que ha conducido el capitalismo y proyecta desde ahí la solución de las mismas, estos ejes son: mandato de mujeres y educativo, mandato de vida y caminos para la paz, mandato de tierras

frente a las imposiciones del Congreso Oficial de la República. Se trata de una propuesta de país que se construye desde las necesidades de la gente, de forma colectiva y en constante de acuerdo con el momento histórico al que responde cada problemática, es decir, se trabaja por el poder del pueblo, y desde los sectores oprimidos que son la base de la organización popular, desde el campesinado, los pueblos indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes, actores urbanos, y el sector educativo en el que nos encontramos como estudiantes.

El Proceso Nacional de Identidad Estudiantil, es una organización que confluye en la MANE y hace parte del Congreso de los Pueblos, que entre sus propósitos apuesta por la construcción de poder popular en el sector estudiantil: “Somos alternativa ante tanta miseria, somos una flor libertaria que quiere construir poder, bienestar y paz para todos” (Identidad Nacional Estudiantil, 2010). Hacen parte de este proceso diferentes colectividades de varias regiones del país, entre las que se encuentra la Red Distrital Estudiantil-RED Revuelta, como proceso local de Bogotá y en la que se articulan diferentes grupos de trabajo de las tres universidades públicas de la ciudad. Como estudiantes hacemos parte de este proceso porque nos ha permitido trabajar desde los principios políticos de la horizontalidad, el trabajo de base, la disciplina consciente, desde el humanismo revolucionario, y que proyecta una incidencia en el sector educativo –universitario y secundario– y establece una relación de lo anterior con los problemas de la ciudad.

Esta alternativa se sustenta en el trabajo en unidad y en la articulación de los sectores sociales en la construcción de una educación para la paz y la dignidad humana; sin embargo, antes de pasar al último apartado que recoge las conclusiones que nos sitúan desde la psicología y ésta propuesta de país, no podemos dejar de lado los retos que tiene la MANE.

territorios y soberanía, mandato de economía contra el despojo, mandato de cultura, diversidad y ética de los común, mandato de derechos humanos y violación del buen vivir, y mandato de unión de los pueblos y globalización.

La MANE ha atravesado una historia de construcción colectiva y movilización permanente como se ha mencionado, pero hoy por hoy se debate, por un lado sobre la necesidad de que retome su carácter de espacio amplio, es decir, en que confluyan no sólo organizaciones estudiantiles, sino cualquier estudiante que piense una educación diferente, esto nos coloca frente al reto de volver sobre el trabajo de base, y fortalecer la articulación de la mesa nacional con los escenarios más locales. Por otro lado, se plantea trascender a una Organización Unitaria de Estudiantes, pues por el momento funciona como una mesa de articulación, con algunas dificultades de comunicación y de dinamización; el reto que le resta es por tanto, seguir en perspectiva de la unidad y de carácter amplio, superando cualquier sectarismo y caminando sobre una propuesta de educación que contiene los puntos de un nuevo programa mínimo que en pleno siglo XXI nos cuestione sobre la necesidad de hacerlo programa máximo, en tanto caminemos de manera articulada no sólo por un modelo de educación diferentes, sino por un país realmente con soberanía, paz con justicia social y democracia.

Estudiar Psicología y construir alternativas

Frente a la problemática nacional de la educación, los demás problemas sociales señalados, y las alternativas encontradas desde el quehacer estudiantil y popular, surge también la necesidad de cuestionar nuestra participación desde la disciplina, en una reflexión sobre ¿cómo aporta la Psicología desde el aula y en el ejercicio profesional en la solución y alternativas de cambio ante los problemas sociales? En este caso, en el problema histórico de la educación en Colombia. Para intentar responder a este interrogante, es necesario como primera medida conocer sobre el papel que ha tenido la Psicología en el contexto Latinoamericano, y colombiano y ante ello asumir una posición crítica que nos permita un acercamiento hacia las posibles soluciones que podemos plantear como estudiantes, ciudadanas y futuras profesionales.

Reconociendo la incidencia que tuvo Ignacio Martín-Baró (2006) en la construcción de una psicología para Latinoamérica retomamos

su percepción sobre la poca incidencia que ha tenido como ciencia y como praxis en la historia de los pueblos de América Latina. Algunas de esas trabas están desconocer el contexto y los problemas propios que configuran una realidad específica, y cómo con ello la reproducción de prácticas de dominación, negación de la cultura propia y el cierre a las posibilidades de diálogo con otras disciplinas y saberes, psicologizando la realidad a favor de estructuras opresoras, cuando se individualiza o se coloca en el plano meramente subjetivo los problemas de una sociedad. Esto responde a la falta de una epistemología desde Latinoamérica que cuestiona el individualismo, el positivismo, el ahistoricismo, el hedonismo y la visión homeostática que Martín-Baró destacó como modelos dominantes en la Psicología.

La enseñanza y la práctica de la Psicología en Colombia, se ha visto permeada por esta visión dominante y por la división de enfoques tradicionales (Psicoanálisis, AEC, Psicología Cognitiva y Psicología Social Comunitaria con un enfoque norte americano y europeo), un énfasis en el desarrollo de la psicología como ciencia enmarcada en el paradigma positivista. La intervención psicologizante e individualizante, la falta de contenidos latinoamericanos en los currículos académicos, las prácticas pedagógicas que mantienen un estado de pasividad y conformismo de los estudiantes y la reproducción de modelos que no obedecen a los lineamientos de un contexto determinado, tanto en la investigación como en la práctica; y así mismo la articulación de estas dos dimensiones, son hechos que evidencian cierta continuidad en la complicidad de la psicología con un sistema hegemónico, tanto político como cultural.

Pese a que ha habido avances en la Psicología Política latinoamericana, la preocupación que rescata Martín-Baró sobre el compromiso político del psicólogo y su compromiso para responder a las necesidades populares, todavía es vigente en el contexto latinoamericano. Precisamente porque una transformación social implica un compromiso político. En este sentido los fundamentos epistemológicos de la disciplina, al lado de una visión política comprometida podrían contribuir a forjar

un psicólogo con capacidad de acción en diferentes campos de la sociedad. La anterior reflexión destaca la necesidad de asumir una identidad para la transformación desde la psicología, pero también como estudiantes, ciudadanos y sujetos políticos.

Esa “construcción” de la identidad gira en torno a cómo asumimos nuestro papel como estudiantes de psicología. Para el caso colombiano es una invitación a no ser sujetos pasivos, sino aportar a la transformación con el empoderamiento de las problemáticas educativas y sociales, fusionadas con las que se consideran propias de la disciplina. Desde esta perspectiva apostamos por prácticas de liberación tanto de la psicología como de la educación, pensándonos la posibilidad de construir una liberación nacional y popular a partir del análisis y el ejercicio de la psicología de la liberación, y de asumir la responsabilidad que la historia con la MANE ha puesto sobre los estudiantes. Sobra decir que para llevar a cabo esta labor es indispensable retomar nuestro contexto social, histórico y político y elaborar con base en ello, esa identidad de confluencia que, más que una identidad pasiva que termina limitándonos, nos lleva a la construcción de imaginarios sociales alternativos, desligados de la imposición del otro, y construido en un influjo narrativo como lo propone Bruner (1991), es decir en diálogo con el otro.

Un modelo alternativo de educación debe estar acompañado del desarrollo de una política pública educativa, frente a otra que hoy se adelanta desde el gobierno después del fracaso de su propuesta de reforma a la ley 30, y de la participación de diferentes actores del sector educativo, como de los diferentes niveles de la educación en Colombia, para que haya una continuidad en la política educativa del país. La propuesta de mandato educativo que se ha hecho desde el Congreso de los Pueblos, justamente sitúa esta necesidad de un mecanismo que vaya mucho más allá de un proyecto de ley, como es una política pública que incluya todos los actores y niveles de la educación, haciendo énfasis en la posibilidad de empoderarnos como ciudadanos activos en cuanto a la participación real e incluyente. Un mandato popular que interpele el estado de cosas que vivimos, a través de procesos de movilización y

organización de carácter permanente, en la que el pueblo pueda mandar obedeciendo, y que articulado a un modelo alternativo de universidad respete y garantice las libertades democráticas, el derecho a la protesta, el entrecruce de la universidad con la sociedad, garantizar el derecho al acceso y permanencia de la clase oprimida a la educación y la implementación de un cogobierno universitario en coherencia con nuestra posición de ciudadanos que nos permita apropiarnos de espacios de discusión y decisión en la universidad. Por lo anterior, Congreso Educativo de los Pueblos es una propuesta que a largo plazo permitiría una construcción de mandato educativo en los diferentes niveles de la educación en Colombia, lo cual no se contrapone a lo que ha adelantado la MANE, sino que resultaría complementario como un escenario de legislación popular.

Asumir una psicología para la liberación implica el propender por una organización desde y para los pueblos, en donde se pueda asumir una posición política y donde la comunidad de base con las que se construye, logren identificar y sortear lo que la organización posibilita para transformar los espacios y lograr una solución a las problemáticas antes mencionadas. El quehacer psicológico debe dirigir en este sentido su mirada hacia la concientización de la sociedad oprimida, y es a partir de educarnos los unos a los otros que caminamos hacia una transformación y liberación.

Para terminar con ésta propuesta de integración de saberes e identidades para la emancipación, hacemos referencia a la importancia de una perspectiva de educación popular que se empieza a entender desde el Congreso Educativo, es decir, una educación construida por el pueblo oprimido y para el mismo, que requiere de una reestructuración en las dinámicas pedagógicas, los contenidos curriculares, las relaciones dentro de la universidad con otros sectores de la sociedad, que proyecte la acción liberadora de los pueblos como lo entiende Freire (1970), por medio de la alfabetización o proceso de concientización del devenir histórico de cada sujeto para la acción. El compromiso de transformación que asumimos desde la psicología debe llevarnos a una praxis liberado-

ra que implica comprometernos como estudiantes, con la construcción de un nuevo modelo de educación y país. Este llamado tiene sus bases en la propuesta que hizo Camilo Torres Restrepo a los estudiantes colombianos en 1965, que citamos para abrir este documento, al igual que en el programa mínimo del 71 y la crítica a la epistemología dominante que hace Martín-Baró, como postulados que siguen vigentes y exigen un compromiso real en la forma de trabajar, estudiar y construir nación, formas de acción que deben encontrarse en la identidad para el cambio a la que hemos hecho referencia.

Bibliografía

De Sousa Santos, Boaventura

2007 *La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad*. Bolivia: Plural Editores.

Barrero, Edgar

2006 *De Macondo a Mancuso: conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia, una aproximación desde la psicología social*. Bogotá: Ediciones desde abajo.

—. (2011). *De los pájaros azules a las águilas negras: Estética de lo Atroz: Psicohistoria de la violencia política en Colombia*. Bogotá: Ediciones Cátedra Libre.

Bruner, Jerome

1991 “La autobiografía del yo” En: *Actos de significado* Madrid: Editorial Alianza.

Freire, Paulo

1970 “La Pedagogía del oprimido”. Disponible en: <http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/varios/freire.pdf>

Herrera, Alexander

2008 “Memoria colectiva y procesos de identidad social en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. MOVICE-2008”. Tesis de Maestría: Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI.

Identidad Nacional Estudiantil

- 2010 “Cartilla: III Asamblea Escuela, Proceso Nacional de Identidad Estudiantil”. Disponible en: <http://identidadestudiantil.blogspot.com/p/quienes-somos.html>

Martín-Baró, Ignacio

- 2006 “Hacia una psicología de la liberación”. *Boletín de Psicología*, No. 22, pp. 219-231. Departamento de Psicología Universidad Centroamericana. Disponible en: <http://www.uca.edu.sv/deptos/psicolog/hacia.htm>

MANE

- 2012 “Declaración política del Primer Encuentro Social y Popular por una nueva educación para un País con Soberanía, Democracia y Paz”. Disponible en: <http://manecolombia.blogspot.com/2012/07/declaracion-politica-primer-encuentro.html>

Ministerio de Educación Nacional –MEN–

- 2013 “Cómo rinde la Educación Superior: Así avanzamos en acceso y permanencia de la educación superior”. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-324532_Presentacion_avances_ES.pdf

Pardo, Miguel y Urrego, Miguel

- 2003 “El Movimiento Estudiantes de 1971 en Colombia”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional sobre Historias de las Universidades de América y Europa. Argentina: Universidad de Córdoba.

Torres, Camilo

- 1965 “Mensaje a los estudiantes”. Periódico Frente Unido Número 9, Octubre 21. Bogotá.